



La reforma electoral que propone el gobierno podría cerrar la ventanilla de la competencia electoral en México por varias décadas.



**LUIS CARLOS
UGALDE**

luiscarlosugalde@integralia.com.mx

0.29%

Este es el tamaño del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) en relación al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en 2025. Como el PEF asciende a 9.3 billones de pesos, el presupuesto del INE –27 mil millones– es en realidad pequeño en el total. Este porcentaje refleja la irrelevancia de la reforma electoral que la Presidenta esbozó la semana pasada, uno de cuyos ejes es reducir el presupuesto del INE y de los partidos políticos.

Este es el cuarto intento del gobierno por reconfigurar el sistema electoral mexicano. El *Plan A*, presentado por López Obrador en abril de 2022, propuso sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, recortar el dinero público para partidos y suprimir los 200 escaños plurinominales. La reforma constitucional no avanzó porque Morena no tenía la mayoría necesaria en el Congreso.

Frustrado ese camino, llegó el *Plan B* en noviembre del mismo año para –mediante una reforma legal– des-

mantelar estructuras administrativas del INE bajo el argumento de eliminar la “burocracia dorada”. El 22 de junio de 2023, la Suprema Corte declaró inconstitucionales partes modulares de ese paquete por vulnerar la autonomía del árbitro electoral.

Lejos de desistir, López Obrador lanzó el *Plan C* en febrero de 2024. Faltaban cuatro meses para la jornada electoral y aprovechó para pedir el voto masivo en favor de Morena para impulsar su agenda legislativa: dieciocho reformas constitucionales que incluían nuevamente una reforma electoral y también una reforma judicial y muchas otras más. Morena y sus aliados lograron –de manera artificial– una mayoría calificada y con ella han aprobado ya la mayoría del paquete de López Obrador, salvo la electoral, porque al inicio de su gobierno la Presidenta la retiró del paquete porque el INE estaría muy ocupado con la organización de la elección judicial.

Una vez superada la elección judicial, Sheinbaum anunció la semana

pasada que presentaría su iniciativa de reforma electoral, su *Plan D*, cuyos ejes son reducir el costo del INE y el financiamiento de los partidos y modificar la figura de los plurinominales. Por supuesto que sería loable organizar elecciones al menor costo posible. Pero si ello significa instalar menos casillas como en la elección judicial, o contar los votos fuera del ojo ciudadano, o men- guar más a los partidos de oposición quitándoles dinero, esta no es una buena reforma.

Si se quieren ahorrar recursos, hay otras vías más efectivas. Por ejemplo, reducir las pérdidas de Pemex que fueron de 620 mil millones de pesos el año pasado (23 veces el costo del INE). O detener el endeudamiento del gobierno (el costo financiero de la deuda será de 1.38 billones en 2025).

Si queremos una reforma electoral de 100% –y no una de 0.29%– se requiere resolver los grandes desafíos de la democracia electoral. Uno, atacar la influencia del crimen organizado en las elecciones; dos, combatir

el financiamiento ilegal de las campañas políticas y tres, acabar con el uso electoral de los programas sociales y con la compra del voto.

El crimen organizado define ganadores y perdedores en cada vez más regiones del país y controla la operación de gobiernos locales. No hay democracia cuando un grupo define candidaturas y financia campañas y ejecuta a sus adversarios. Asimismo, las campañas erogan cantidades ingentes de dinero. Ríos de efectivo circulan en el país sin respetar los topes legales que establece el INE. El dinero proviene del gobierno federal, de gobernadores y de contratistas que quieren hacer negocios.

Finalmente, como decía López Obrador cuando fue candidato opositor, es inmoral que los gobiernos medren con los programas sociales para ganar elecciones. La dignidad del pueblo se mancilla cuando con una mano das ayuda pero con la otra obligas a votar por un partido. Para honrar el ideario de AMLO, es urgente insistir nuevamente –como se hizo en los años noventa cuando el PRI gobernaba– que los programas sociales no son patrimonio de los partidos sino de la gente.

No solo la reforma que propone el gobierno es irrelevante para atacar los verdaderos problemas de la democracia electoral, sino que podría cerrar la ventanilla de la competencia electoral en México por varias décadas. Ese es el tamaño del problema que se avizora.